

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO
DEMANDADO	CLICKING POS S.A.S.
PROCEDENCIA	JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-024-2021-00020-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN DEMANDANTE
TEMAS Y SUBTEMAS	- Descuentos Autorizados - Indemnización Moratoria Art. 65 CST - Reclamo Cuentas de Cobro
DECISIÓN	CONFIRMA

SENTENCIA No.001

Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta No.001 de 2023, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del **DEMANDANTE** contra la Sentencia No. 219 del 30 noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

El señor **HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO** presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad **CLICKING POS S.A.S.** con el fin de que: **1)** Se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, vigente desde el 16 de mayo de 2019 hasta el 17 de febrero de 2020, culminado de manera injusta por la demandada. **2)** En consecuencia, solicitó condenar a la sociedad accionada al pago de las prestaciones sociales y vacaciones causadas durante el vínculo. **3)** Así mismo, peticionó el pago de la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria reglada en el artículo 65

CST, y las cuentas de cobro adeudadas por valor de \$335.000. 4) Por último, deprecó la indexación de las sumas resultantes.

Sustentó sus peticiones en que, ingresó a laborar a la empresa **CLICKING POS S.A.S.** el 16 de mayo de 2019, vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar las funciones de asesor comercial, capacitador, servicio al cliente, soporte técnico, gestor de base de datos y auxiliar administrativo/contable, remunerado mensualmente con la suma de \$1.500.000. Que las actividades descritas las desarrolló en jornada de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm, y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

No obstante, informó que el 17 de febrero de 2020 recibió carta remitida por la empresa, en la cual le manifestaron la decisión de terminar el contrato de trabajo por mal comportamiento en relación con los horarios de trabajo, el uso inapropiado de las herramientas de trabajo e insubordinación, manifestaciones que, adujo, no son ciertas, produciéndose un despido sin justa causa, pues incluso, dentro de la liquidación realizada por la demandada, incluyó la indemnización por dicho suceso.

Que no estuvo de acuerdo con la liquidación, por lo que en varias ocasiones se comunicó con la empresa a través de correo electrónico solicitando el pago de las cuentas de cobro pendientes de cancelar, por concepto de dineros gastados en actividades de la empresa, mismos que en las respuestas a sus solicitudes la demandada aceptó adeudarlos, añadiendo que en estas comunicaciones era requerido para que firmase la liquidación, so pena de no obtener el pago de las prestaciones definitivas. Frente esta última circunstancia, expuso que el importe de sus acreencias debió ser consignado ante la autoridad competente.

Finalmente manifestó que, en reiteradas ocasiones solicitó a la empresa el pago de su liquidación y las cuentas pendientes, recibiendo respuesta previa interposición de derecho de petición, pero dicho pronunciamiento adujo, no satisfizo sus pretensiones, motivo por el cual acudió a demandar a la empresa. (f. 2 a 10 Archivo 03 ED y f. 4 a 7 Archivo 07 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

En el momento procesal oportuno, la sociedad **CLICKING POS S.A.S.** se opuso a lo solicitado en la demanda, tras alegar que el dinero producto de la liquidación definitiva fue entregado a COMFAMA, en razón a la obligación crediticia que el demandante sostenía con esta entidad, para lo cual autorizó el respectivo descuento, con excepción de lo relativo a las cesantías e intereses, conceptos los cuales expuso, los compensó por obligaciones en cabeza del demandante; excepcionó: “(...) *COBRO DE LO NO DEBIDO - PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA; COMPENSACIÓN DE CESANTÍAS E INTERESES A LAS CESANTÍAS CON OBLIGACIONES CIERTAS Y EXIGIBLES A CARGO DEL TRABAJADOR; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN – PAGO DE SALARIOS; IMPROCEDENCIA DE INDEMNIZACIÓN MORATORIA – BUENA FE; MALA FE Y TEMERIDAD DEL SEÑOR HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO e IMPROCEDENCIA DE CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO* (...)” (f. 1 a 14 Archivo 10 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia No. 219 del 30 noviembre de 2021, decidió absolver a la sociedad **CLICKING POS S.A.S.** de las pretensiones incoadas en su contra por el señor **HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO**, a quien le impuso la obligación de asumir las costas procesales.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial del **DEMANDANTE** apeló la decisión argumentando que no hay una correcta valoración de la prueba presentada, como quiera que solamente se prestó atención a la prueba de la contraparte, aludiendo que, durante todo el tiempo hubo un reconocimiento de la deuda por parte de la demandada, situación establecida por la probanza documental y testimonial.

Que en relación con lo sucedido con el cliente “*Cristo Rey*”, el pago sí fue realizado a su representado, quien de hecho firmó un recibo, actuación que hubiere realizado de existir un interés de ocultamiento, y después pagó a la empleadora, quien ahora intenta manifestar que no canceló para alegar una compensación y no tener que pagar las sumas que reclamadas, pues pese a que pueden demostrar que ese dinero fue recibido por el actor, no ocurre lo mismo frente a que este se hubiere quedado con el mismo, siendo cosas totalmente distintas. De otro lado, indicó que, en lo referente al pago del cliente “*Mis Huellitas*”, nunca le solicitaron el soporte o pago de este importe.

Más adelante expresó que, de acuerdo con el testimonio de la señora María Victoria Saldarriaga Cartagena, aquella indicó deber las cuentas de cobro, las cuales eran canceladas vía transferencia, acción de la que no se aportó ningún documento, y que, si bien el actor no arrió soporte, tampoco se acercaron a este para hablar sobre el monto adeudado por cuentas de cobro, apuntando también contra el testimonio de Jonathan Martínez, frente al que dijo, solo laboró un mes y medio al lado del demandante, pero sus manifestaciones dan a entender que estuvo todo el tiempo con este, informando incluso, que al demandante le fue cancelada su liquidación, pese a que la propia accionada admite que no se canceló de manera total, y a que la otra deponente afirmó que durante las últimas tres (3) semanas de su vinculación, el trabajador no aparecía en la empresa.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término oportuno, el mandatario de la parte **DEMANDANTE** alegó, en primera medida, que en efecto, la liquidación de prestaciones no fue pagada en su totalidad, adeudando las cesantías y los intereses a las cesantías, rubros que la empresa no canceló tras argumentar que el trabajador se quedó con dineros de su propiedad, aclarando que está aceptado que los clientes *Cristo Rey* y *Mis Huellitas*, cancelaron al trabajador directamente, pero no por esto puede decirse que aquel se apropió de tales sumas, pues precisamente los trabajadores muchas veces operan como agentes retenedores, lo que resulta normal en actividades de atención al cliente, recibiendo el dinero para después entregárselo al empleador, como sucedió con el cliente *Cristo Rey*. Respecto a *Mis Huellitas*, afirmó que el

pago en este evento se hizo a través de la cuenta bancaria, cuestión no prohibida ni siquiera por su contrato, reiterando que esta circunstancia corresponde a una estrategia desesperada de la accionada, pero que, ni siquiera fue utilizado como argumento para despedirlo con justa causa.

Que en lo relativo al *chat* sostenido con *Mis Huellitas*, no se observa ningún indicio que dé cuenta acerca de que el demandante se quedó con dineros de la empresa, como tampoco se le ve sorprendida por el hecho de que el trabajador recibió el pago, porque realmente, la entidad sabía de antemano del pago, aunado a que el trabajador ya había entregado los recursos. Luego adujo que, su contraparte sabía que adeudaba sumas al actor, y por ello lo presionaba para que firmara la liquidación, lo que se prueba, al igual que el reconocimiento de la deuda por parte de la empresa con el pantallazo del respectivo *email*. Con todo expuso, quedó en evidencia la mala fe de la empresa.

Por último, insistió en que, en lo concerniente a las cuentas de cobro, la prueba testimonial muestra que a los trabajadores se les pagaba este rubro cuando había lugar a ello, y en uno de los mails sostenidos con el trabajador, se solicita reevaluar tales cuentas, asumiendo con este un reconocimiento de deuda, debiendo accederse a su pago (Archivo 04 ED).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en establecer, primero, si resulta válido que la sociedad **CLICKING POS S.A.S.** efectuara descuentos por compensación de dineros de la liquidación definitiva del señor **HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO**. De establecerse que adeuda alguna suma al trabajador por concepto de prestaciones, se estudiará si procede imponer a la empresa el pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 CST o la indexación de las sumas resultantes. En segundo lugar, se analizará si hay lugar a ordenar a la pasiva el pago del importe de las cuentas de cobro pretendidas por el demandante.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL 2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

A esta altura no son materia de discusión los siguientes aspectos facticos:

1. Que el señor **HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO** estuvo vinculado al servicio de la sociedad **CLICKING POS S.A.S.** mediante contrato de trabajo

a término indefinido vigente desde el 16 de mayo de 2019 (f. 16 a 20 Archivo 10 ED).

2. Que el cargo desempeñado por el actor fue el de “asesor técnico” (f. 16 a 20 Archivo 10 ED).
3. Que el vínculo en comento fue culminado a partir del 17 de febrero de 2020 por decisión unilateral de la empleadora, según misiva adiada de la misma calenda (f. 21 Archivo 01 ED).

DE LOS DESCUENTOS NO AUTORIZADOS POR EL TRABAJADOR

En sí, la discusión gravita entorno a la procedencia de la compensación efectuada por la empresa **CLICKING POS S.A.S.** del saldo de la liquidación definitiva que restaba por pagarle al señor **HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO**, por valor de \$212.540, correspondientes a las cesantías e intereses a las cesantías, en atención a que, argumentó la demandada, el trabajador recibió en su momento dinero de varios clientes, que no reportó ni ingresó a las arcas de la sociedad (\$240.000), actuación que desde la óptica del extremo activo considera un descuento indebido y da lugar a que el empleador cancele dicho valor, así como la indemnización moratoria generada a partir de estas sumas insolutas.

Al decidir sobre este tópico, la Juez de primer grado concluyó que, al compás de la legislación y la Jurisprudencia Laboral, si bien están prohibidos los descuentos de salarios y prestaciones sin autorización del trabajador, esta condición se extiende hasta la vigencia del contrato, pero culminado el vínculo, puede prescindirse de esta autorización. En ese sentido, expuso que, de las pruebas, en especial la testimonial, quedó acreditado que el trabajador recibió dinero de parte de los clientes de la empresa que atendió, razón por la que procedía la compensación de tales sumas, aunado a que, desde el mismo contrato se autorizó el descuento de bienes dados a cargo y no reintegrados.

De lo anterior se duele el demandante argumentando una indebida valoración del cúmulo probatorio, pues, en su criterio, además de que todo el tiempo hubo un reconocimiento de la deuda por parte de la empresa, sin desconocer que el trabajador recibió las sumas de dinero que le son atribuidas, pagadas por dos (2) clientes de la sociedad, indicó que nunca hubo ocultamiento de esta situación por parte de aquel con el ánimo de apropiarse de los recursos, como quiera que después los reembolsó a la empresa, tanto que la empresa ni siquiera solicitó el soporte de pago efectuado por cuenta del cliente *Mis Huellitas*, por lo que insiste en que debe condenarse a la demandada al pago de las prestaciones adeudadas.

De acuerdo con la postura asumida por las partes, lo primero a relieves por la Sala es que, en materia de prohibiciones al empleador, el numeral 1° del artículo 59 CST consagra como una de ellas:

“(…) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400;

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las autorice (...)."

Por su parte, el artículo 149 del CST modificado por el artículo 18 de la Ley 1429 de 2010, dispone:

"1. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnizaciones por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados o pérdidas o averías de elementos de trabajo; entrega de mercancías, provisiones de alimentos y precio de alojamiento.

2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses (...)" (Subraya y Negrilla de la Sala).

Nótese entonces que, del articulado en cita, surgen tres (3) escenarios en los cuales el patrono puede efectuar descuentos o compensaciones imputadas a los salarios y prestaciones de su empleado, como son: 1) Los autorizados por decisión del Juez del Trabajo, entendiéndose que la intervención de este propende hacia la protección de los derechos del trabajador; 2) Los autorizados por el propio trabajador según el caso en particular, siempre que ello no afecte el salario mínimo legal o convencional, tampoco la porción considerada inembargable, y cuando la deuda no exceda en tres (3) veces el salario. Dicha autorización debe constar por escrito. 3) Los descuentos autorizados por la Ley (Art. 113, 150, 151, 152 y 400 CST).

Respecto de los descuentos efectuados en la liquidación final del contrato, que son los que corresponden al asunto materia de la litis, tal como lo consideró la Juez de instancia, ha dicho la Jurisprudencia Especializada Laboral que, las deducciones no autorizadas por el trabajador son ilegales mientras ellos se efectúen en vigencia de la vinculación, pero una vez finiquitada esta, no es posible predicar lo mismo, toda vez que justo en ese momento desaparece la garantía de crédito para el empleador, como son el salario y las prestaciones del subordinado, caso en el cual, las partes pasan "*al plano de la autonomía de la voluntad o de la libertad contractual*".

De esa manera lo rememoró la Sala de Casación Laboral de la CSJ en la Sentencia SL860-2020, en la que recordó la Sentencia emanada dentro del Rad. 27282 del 5 de noviembre de 2008, donde precisó:

"(...) Las restricciones al derecho de compensación del empleador mediante la prohibición de descuentos sin autorización tiene carácter protector plenamente

justificado durante la vigencia del contrato de trabajo, es decir, cuando está en pleno vigor la dependencia y subordinación del trabajador en relación con el empleador.

Pero para el momento de terminación del contrato la subordinación desaparece, como también fenece el carácter de garantía que los salarios y prestaciones sociales ofrecían para los créditos dados por el empleador al trabajador y otorgados para el cabal desarrollo del objeto del contrato de trabajo por suministro de equipos, materiales o de las sumas entregadas para su adquisición, o para el bienestar del trabajador bajo la forma de anticipos de salario, o de préstamos para solucionar necesidades de seguridad social, ora por vivienda, salud, o calamidad doméstica”.

La consecuencia razonable de que los créditos laborales consolidados o de los que se tuviere la expectativa de que se van a generar por la subsistencia del vínculo laboral futuro, se hubieren ofrecido como garantía de pago de dinero es que valgan como tales y por tanto obren sin restricciones en el momento límite de su eficacia, esto es para cuando se ha de liquidar el contrato de trabajo y se clausura la posibilidad de la causación de más salarios o prestaciones sociales (...).”.

De igual forma, el Alto Tribunal indicó en Sentencia SL735-2021 que, para que opere la figura en comento, es imperativo que se cumplan los presupuestos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil, explicándolo en términos sencillos: **“(...) La compensación sólo procede con obligaciones plenamente exigibles, esto es, si el trabajador debió satisfacerlas durante la vigencia del contrato, o las contrajo bajo la condición de que se hacían exigibles en el momento de la terminación del contrato de trabajo (...).”** (Subraya y Negrilla de la Sala).

Visto lo anterior, en procura de aclarar las circunstancias fácticas que rodearon la compensación efectuada por la empresa respecto de las prestaciones del demandante, por solicitud de la parte demandada fueron escuchadas las declaraciones de MARÍA VICTORIA SALDARRIAGA CARTAGENA (Min. 06:58 a 32:30 Archivo 19 ED) y JONATHAN MARTÍNEZ (Min. 01:00 a 12:48 Archivo 21 ED). La primera, quien labora al servicio de la demandada como Líder de Producto, aceptó haber conocido al demandante debido a su vínculo con la accionada, ejercicio en el que fue su jefe directo. Explicó que el actor cumplía funciones de asesor técnico, capacitaba a usuarios, velaba por que los clientes dieran buen manejo a la aplicación, contestaba llamadas, reportaba problemas de *software*, hacía instalaciones y montajes de producto, sin estar en ningún caso autorizado a recibir dinero directamente o a través de consignaciones en su cuenta, puesto que, para ello, al ingreso se les daba el número de la cuenta empresarial.

Que una vez se dio la desvinculación del señor **NIETO GIRALDO** informaron a toda la clientela sobre esta situación, a lo que varios se pronunciaron manifestando que habían entregado dinero al citado, procediendo la empresa a solicitar los comprobantes de recibido, de los cuales arrimaron dos (2) que daban cuenta de un pago en efectivo y otro a través de la cuenta personal del trabajador.

Que la primera transacción la hizo en efectivo el cliente *Cristo Rey*, de quien previamente el demandante informó a la empresa que había consignado \$190.000, de los cuales entregó solamente \$150.000; no obstante, el reporte entregado por el cliente era por la suma de \$390.000, lo que llevó a que fuese requerido por el restante, pero solo entregó \$200.000, restando por esta operación \$40.000. Luego, la testigo relató lo sucedido con el

cliente *Mis Huellitas* o *Medical Center*, ente que consignó a la cuenta personal del actor la suma de \$200.000.

En lo que respecta al segundo testigo referido, aquel indicó haber sido compañero de trabajo del demandante por espacio de un mes y medio, asignado también en el área de reportes, atención al cliente, capacitaciones, precisando el testigo que no estaban autorizados los empleados para recibir dinero. En ese sentido, adujo que después de la salida de su compañero, varios clientes manifestaron haberle entregado dineros a aquel, desconociendo si este reportó o no aquellas sumas.

En contraste con lo anterior aparece la prueba documental arrimada al expediente, de la que se destaca la imagen del comprobante de egreso que certifica la entrega en efectivo de \$390.000 por concepto de “cancelación suscripción servicio *CLICKING POS*” (f. 24 Archivo 10 ED), documento que aparece suscrito por el demandante, mismo que no fue tachado o negado por este. A folio 25 Archivo 10 ED se observa la impresión de correo electrónico remitido a la dirección virtual del señor **NIETO GIRALDO**, que en su cuerpo contenía:

“(…) Por favor requiero me entregues el dinero que te hizo entrega Cristo Rey, el día 4 de Febrero, tú me entregaste solo \$150.000, diciéndome que el cliente te había entregado \$190.000, me restabas \$40.000; pero según comprobante entregado por el cliente, él te entrego \$390.000.

Me estas debiendo: \$240.000, me los puedes consignar a la cuenta: No. 61100011880 cuenta corriente Bancolombia - Clicking Pos S.A.S.

El soporte de la consignación me lo puedes enviar a este mismo correo. (…)”

Así mismo, a folios 26 a 30 Archivo 10 ED reposan pantallazos de conversación de *WhatsApp* de lo que sería el teléfono de la empresa y el cliente denominado *Medical Center*, conversación en la que se adjunta comprobante de consignación por valor de \$200.000, efectuada directamente a la cuenta bancaria perteneciente al señor **HAROLD ANDRÉS NIETO GIRALDO**, conforme se constata del documento de folio 31 Archivo 10 ED, en el que se registra dicho producto a su nombre.

Frente a la validez y plenitud de la información contenida en esta última documental referenciada, es menester indicar que, en Sentencia T-043 de 2020, la Corte Constitucional expresó que los pantallazos de aplicación como prueba electrónica no tienen más que **connotación indiciaria**, dada la posibilidad de manipulación, lo que implica el contraste de su contenido en conjunto con la demás cauda probatoria. Así lo señaló: “(…) *los avances tecnológicos que a nivel global se han dado en distintos campos (ciencia, medicina, aplicativos digitales), también han influido en el entendimiento y el ejercicio del derecho. Al efecto, en el ámbito probatorio, por ejemplo, los operadores judiciales diariamente deben analizar elementos extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se cuente con metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la información o solo capturas de pantallas respecto de ciertas afirmaciones o negaciones realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre estas últimas, la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba. (…)*”.

En armonía con lo anterior, importa anotar que, en reciente pronunciamiento, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en decisión emitida el 14 de septiembre de 2022 dentro del Rad. 41001110200020170059802, fue más allá en comparación con lo señalado en el precedente Constitucional, indicando que: “(...) *En ese sentido, esta Comisión retoma el principio general de interpretación que indica que cuando el texto de la ley es claro no le es dado al intérprete asignarle un alcance diferente; ello, porque el artículo 244 del C.G.P. al señalar lo referente a la autenticidad de los documentos en cuanto a su carácter de públicos o privados, y al incorporar los mensajes de datos en el inciso 5°, aceptó, primero, que constituyen un documento y segundo, en lo que corresponde a su aporte en original o en copia, señaló una presunción de autenticidad del mismo, presunción legal, que admite prueba en contrario, bajo la condición de que sea alegada su falsedad, caso en el cual, y en el evento de comprobarse que dicho documento fue manipulado, adulterado o falsificado, dejará de tener valor probatorio. (...)*”.

No obstante, más allá de la postura que se acoja en relación con la relevancia probatoria de dichos pantallazos, lo cierto es que la discusión en torno a si el demandante recibió o no, dinero de los clientes *Cristo Rey* y *Medical Center* por trabajos realizados en nombre de la sociedad **CLICKING POS S.A.S.**, a juicio de la Sala, aparece superada desde los argumentos de la propia parte demandante, ya que, **tanto en la sustentación del recurso como de los alegatos presentados en esta instancia,** se dejó sentado el recibo de aquellos dineros, concordando entonces con los señalamientos de la parte contraria, quien desde la contestación al gestor expuso aquella circunstancia, cuestión que, de paso termina corroborando la veracidad de la documental descrite en precedencia, incluido lo relativo al pago acreditado vía mensaje de datos.

En ese orden de ideas, no obstante a que desde la orilla demandante se haga un esfuerzo por hacer ver que a pesar de haber recibido los importes descritos, no hubo la intención de su parte de apropiarse de estos, lo cierto es que echa de menos el proceso prueba indicativa que dé cuenta de que en efecto, una vez recibidos los dineros por parte del trabajador, este los hubiera retornado en su totalidad a la empresa, como correspondía, dado que la actividad se desarrollaba en función de su empleo al interior de esta. Por el contrario, se observa que, incluso, la compañía se aprestó a requerirlo para que procediera a consignar el faltante de las sumas pagadas por el cliente “Cristo Rey” (f. 25 Archivo 10 ED), aceptando la contratante que el obligado realizó una consignación parcial, quedando pendiente otro tanto.

De otro lado, pese a que el recurrente alega que la accionada ni siquiera lo requirió para la entrega de lo pagado por Medical Center, ello no quiere decir que la entidad cohonestó o aprobó tácitamente ese accionar, puesto que, asume la Sala, tal como aparecen concatenados los hechos, la gestión de cobranza no se consideró necesaria por parte de la empresa, al existir saldos en su favor que podían ser objeto de compensación.

Por consiguiente, como lo coligió la Juez de primer grado, al haber estado en la obligación de entregar los dineros recaudados en nombre de la empresa, y no hacerlo, era totalmente viable, al tenor de lo señalado en la Jurisprudencia, que de lo adeudado por concepto de liquidación la entidad compensara aquellos dineros que, estando probado y aceptado fueron efectivamente recibidos por el trabajador en desarrollo de sus funciones, no estuvo aquilatada su posterior entrega por el trabajador a la empresa, en tanto que, por fuera de que existiera o no autorización para el recibo de estos, no había duda que pertenecían a la

empresa. Lo contrario sería autorizar una retención de dineros indebidamente percibidos, en el marco de un abusivo ejercicio del derecho, lo que trae de suyo que deba confirmarse la sentencia de primer grado en este aspecto.

Así entonces, el decaimiento de esta pretensión, hace que corra la misma suerte el reclamo de la indemnización moratoria del artículo 65 CST, en la medida en que el estudio de esta última pendía del éxito de la primera.

CUENTAS DE COBRO RECLAMADAS

El demandante reclama el pago del importe de tres (3) cuentas de cobro que, por concepto de transporte, expuso, son adeudadas por la empresa, pedimentos negados por el A *quo* tras concluir que, a más de carecer de la constancia de recibido por parte de la entidad accionada, no había prueba de la causación de estos, los cuales se generaban a partir de las visitas a los clientes.

En contra de lo concluido por la Juez, el mandatario de la parte al proponer la alzada manifestó que, según lo evidenciaron las pruebas, este concepto de transporte era pagado por la empleadora a través de transferencia bancaria, y a pesar de no haber arrimado soporte, dejó dicho que de parte de la empresa tampoco se acercaron al trabajador para hablar del monto pendiente.

Bajo tal panorama, de entrada, anota la Sala que el ejercicio probatorio no permite llegar a una conclusión distinta a la asumida en sede de primera instancia, como quiera que, al escudriñar en los medios suarios, se encuentran a folios 15 a 20 Archivo 03 ED las cuentas de cobro correspondientes al mes de enero, que aduce según el actor dice, están pendientes de ser canceladas por demandada. A continuación, a folios 27 a 30 Archivo 03 ED, reposa trazabilidad de mensajes cruzados a través de correo electrónico entre el señor **NIETO GIRALDO** y Vicky Saldarriaga de **CLICKING POS S.A.S.**, comunicaciones en las que se lee la insistencia del demandante en el cobro de los citados rubros, evidenciándose como respuesta de la entidad que:



Luego, al indagarse a los testigos sobre este tópico, especialmente la señora MARÍA VICTORIA SALDARRIAGA CARTAGENA explicó con suficiencia que, en cumplimiento de sus funciones, el demandante debía trasladarse en ocasiones por fuera de la ciudad (Ej. Fredonia, Peñol y otros), y por ello la empresa cancelaba un concepto por transporte adicional al auxilio legal, crédito pagado, aclaró, por mera liberalidad del patrono. Que las

cuentas de cobro no eran frecuentes, pero al presentarse se reconocían. En punto de lo discutido, adujo que antes y después de la desvinculación el demandante este presentó varias cuentas de cobro que no fueron canceladas porque no había respaldo de los clientes visitados, dado que, durante las últimas tres (3) semanas el trabajador no apareció en la empresa, por lo que incluso fue requerida su comparecencia a la oficina.

En relación con el trámite, aclaró que el empleado entregaba la cuenta de cobro, y para su reembolso la misma se sometía a un análisis o seguimiento con el mismo trabajador, para de esa manera conciliarla; trámite que, de obviarse, no daba lugar a su pago.

A partir de lo anterior, se denota que, el pago de las citadas cuentas requería de un trámite previo de verificación, frente al cual, destaca la Sala, no aparece en el plenario, primero, que se hubiere llevado a cabo el mismo, y conforme a ello, la sociedad hubiere aceptado adeudar los valores solicitados; y segundo, que aun cuando se desconoce el agotamiento de la verificación o conciliación de tales cuentas, para predicar la causación de este beneficio, de las pruebas recaudadas tampoco es posible establecer siquiera con mediana claridad, que el demandante en efecto hubiere ejecutado la gestión en la que se sustenta el cobro, esto es, la visita a los clientes de la empresa en las áreas que generaban el presunto cobro, carencia probatoria que echa por tierra la aspiración puntual en este ítem.

En consecuencia, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia. Las costas están a cargo del demandante, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a \$100.000.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia No. 219 del 30 noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Las **COSTAS** en esta instancia están a cargo del DEMANDANTE, incluyendo como agencias en derecho la suma de \$100.000.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA